

ECONOMÍA / POLÍTICA

LOS PRESUPUESTOS Y LAS REFORMAS QUE NECESITA ESPAÑA

La economía española se la juega con

CUENTAS DE 2021/ Los Presupuestos Generales del Estado son los más complicados en casi una década, tanto por la aritmética crecimiento. Todo ello, además, con el telón de fondo de la necesidad de poner las bases de ciertas reformas que permitan dar

Pablo Cerezal, Madrid

España se enfrenta a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) más complicados en casi una década, y también los más decisivos. Aunque el país cuenta con cierta manga ancha para el déficit, eso no significa que el Ejecutivo no tenga que tener cierta cautela sobre el gasto público, ya que de su acierto, tanto en el aprovechamiento del plan europeo de inversiones como en la puesta de las piedras angulares de las próximas reformas, depende que España pueda recuperar el ritmo de crecimiento y de creación de empleo. Y eso es crucial, a su vez, para que el país pueda soportar el incremento del coste de la deuda en los próximos años, una vez que se vaya disipando el apoyo del Banco Central Europeo. Dicho de otra forma: España se juega en estas Cuentas su bienestar en la próxima década.

El plan de recuperación europeo

Next Generation EU es, probablemente, el elemento más esperanzador para relanzar la economía en los próximos años, pero también el más inquietante si se observa el gran precedente español en la crisis anterior, los *Planes E* de Zapatero. España dispondrá de 140.000 millones de euros, entre ayudas directas y préstamos, para relanzar la economía, asegurar la supervivencia de las empresas viables, ejecutar inversiones que mejoren el crecimiento en el largo plazo y apoyar reformas estructurales. Sin embargo, también es una espada de Damocles, ya que un mal uso de estos fondos, en el que se priorice la creación de empleo a corto plazo sobre la mejora de la productividad en el largo plazo y la sostenibilidad financiera de las nuevas infraestructuras, puede dejar a España más endeudada, con un mayor gasto y sin un mayor crecimiento que permita pagarlos.

La construcción es uno de los sectores que se pueden ver

Hay que apoyar exclusivamente a aquellas empresas que ya eran viables antes de la crisis

Es necesario extender los ERTE mientras dure la crisis pero acotarlos a ciertos sectores

más impulsados por este plan, ya que la patronal, Seopan, ha identificado posibles proyectos por valor de hasta 157.000 millones de euros en alta velocidad, cercanías, infraestructuras sanitarias y tratamiento de agua, entre otras áreas. Otra de las áreas clave es la transición ecológica, incluyendo la reconversión de las antiguas zonas mineras y también la promoción del coche eléctrico, así como el despliegue de la red 5G de Internet. Sin embargo, en todas ellas conviene tener presente que la financiación pública es para dinamizar inversiones que sean rentables y útiles para el sector privado, y no para planes que no tendrían futuro si no fuera por el *maná* de Bruselas.

Otro de los elementos para los que se puede utilizar el fondo europeo es para apoyar a las empresas más golpeadas por el coronavirus, debido al desplome de la demanda o a la imposibilidad de mantener su negocio en unas condiciones que permitan asegurar su rentabilidad. Es el caso de las aerolíneas, las cadenas hoteleras, buena parte de la industria (especialmente la automovilística, aunque también la de bienes de equipo), la restauración o el sector textil. Estos rescates pueden resultar esenciales para evitar un mayor desplome de la economía y, sobre todo, para facilitar su recuperación en los próximos años, ya que volver a los niveles de PIB de 2019 se antoja mucho más farragoso si exige recuperar no sólo la demanda sino también volver a construir todo el tejido productivo y su *know how*. Además, algunas de estas empresas pueden

resultar críticas para algunos clave, como es el caso del turismo. Sin embargo, este apoyo se debe hacer de forma quirúrgica, permitiendo la supervivencia de empresas que eran viables antes de la crisis y evitando grandes cargas que pongan en peligro su futuro, pero evitando insuflar fondos a aquellas compañías que ya arrastraban serios problemas antes del coronavirus.

¿Hasta cuándo mantener los ERTE?

Otro de los dilemas es hasta cuándo mantener los ERTE y en qué sectores mantenerlos. Por un lado, es necesario extender esta protección mientras dure la crisis sanitaria, con el objetivo de conservar el poder adquisitivo de la población y su nivel de consumo. El argumento a favor de esta medida es que permite que las empresas adecuen su plantilla a su nivel de actividad, reduciendo sus costes, al tiempo que permiten a los trabajadores mantener en gran medida su poder adquisitivo y su confianza en que mantendrán unos ciertos ingresos durante los próximos meses. Sin embargo, este mecanismo no se puede mantener de forma generalizada, no tanto por su coste (cerca de mil millones al mes actualmente) como por la necesidad de poner en funcionamiento las fuerzas de la destrucción creativa que mueven la economía. Es decir, que si un sector no va a poder recuperar su volumen de actividad en los próximos años, no tiene sentido mantenerle la respiración asistida, sino facilitar los despidos y el reciclaje de los antiguos trabajadores para que se dirijan a otras actividades más dinámicas. Además, una reducción del exceso de tejido adiposo en determinados sectores puede ayudar también a que las empresas que quedan ganen cuota de mercado y rentabilidad, lo que les ayudaría a reducir sus pérdidas, a generar beneficios antes y a poder pagar más fácilmente las deudas contraídas.



La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Bajar impuestos para impulsar la economía

Otra de las palancas que el Gobierno puede utilizar para relanzar la economía son bajadas de impuestos en aquellas áreas que más pueden apoyar la creación de empleo y la inversión. Es el caso, por ejemplo, de una rebaja del Impuesto de Sociedades, bien sea en su tipo impositivo o bien con mayores deducciones a la inversión. Cualquiera de las dos formas sería beneficiosa para la economía, ya que la primera permitiría incrementar el capital disponible en manos de las empresas, permitiéndoles una mayor inversión, y la segunda estimularía esa inversión y, además, les permitiría reducir los gas-

tos. Se puede argumentar estas medidas tienen un coste inasumible en estos tiempos, pero sucede justo lo contrario: en un momento en el que la recaudación está en mínimos, la pérdida de ingresos derivada de una bajada en estos impuestos es también mínima y, a cambio, traslada a las empresas extranjeras que quieren invertir en España que se trata de un país atractivo para los negocios, con lo que podrán tener una elevada rentabilidad en los próximos ejercicios.

Otro elemento donde una rebaja puede ser de ayuda es en las cotizaciones sociales, tanto mediante un descenso de los tipos a nivel general (algo que ayudaría a minorar los gastos de las empresas) o puntual (por ejemplo, un descuento a las empresas que

creen o mantengan el empleo). Y aunque resulta más complicado tocar el IVA, puede ser muy útil reducirlo para determinados productos (vivienda, coches, electrodomésticos) cuyo consumo no termina de arrancar por la pérdida de confianza.

Todo ello con el objetivo de evitar un círculo vicioso en el que las empresas empiezan a reducir inversiones y contrataciones por el miedo a que la caída de la demanda persista y los ciudadanos no relanzan su nivel de consumo (especialmente en aquellos bienes más duraderos) por temor a perder su puesto de trabajo.

Todo ello se puede trasladar a un mayor déficit, con el objetivo de ir cerrando esta brecha en el futuro, o bien compensar las rebajas con una disminución de aquellos

los Presupuestos del Estado

parlamentaria como por la importancia de gastar bien los fondos europeos y de dar confianza a los inversores para relanzar el un impulso añadido al crecimiento y controlar el déficit para evitar que la avalancha de deuda amenace el largo plazo.



impuestos que no son tan lesivos para el crecimiento económico. Es el caso de los impuestos indirectos y, especialmente, de los impuestos especiales, que además Europa ha reclamado subir en numerosas ocasiones. Quizá el caso en el que haya un mayor margen para este incremento es el del impuesto de los carburantes, dado que es uno de los productos donde hay una mayor diferencia con la media europea. En concreto, un litro de gasolina en España paga una media de nueve céntimos menos en impuestos que en el conjunto de la Unión Europea, mientras que en el caso del gasóleo la diferencia se amplía a trece céntimos. Además, hay otros dos factores que pueden hacer que esta medida sea más fácil de digerir. Por un lado, el petróleo se

mantiene en niveles mínimos, por lo que la gasolina y el gasóleo también están cerca de 30 céntimos el litro por debajo de las cifras de hace unos años. Por otro, unos mayores precios de los carburantes se pueden traducir en un menor uso del vehículo, lo que acabaría reduciendo los atascos.

Reformas y rebaja del gasto no productivo

Aunque soplar y sorber al mismo tiempo es imposible, y es imposible reducir el déficit al tiempo que se bajan impuestos y aumentan los gastos en pleno desplome de la actividad, sí que se puede trasladar la señal de que el déficit está bajo control mientras au-

menta el gasto productivo. ¿Cómo? Bajando el gasto no productivo y ciertas partidas del gasto estructural de forma inmediata y poniendo en marcha ciertas reformas que permitan moderar otros gastos en el futuro.

Por un lado, el gasto puede reducirse mediante un recorte en aquellas que no contribuyen al crecimiento, como son por ejemplo las actividades que no generan un gran rendimiento económico ni social, como la estructura ministerial, especialmente hipertrofiada en los últimos años, subvenciones concedidas sin control o determinados servicios muy deficitarios. Además, también se puede llevar a cabo un ajuste puntual en los salarios de los funcionarios, seguido del compromiso de contener las nue-

vas plazas y de ligar parte de la retribución de los empleados públicos a su rendimiento en aquellos puestos donde sea posible. No hay que olvidar que la destrucción del empleo durante la pandemia ha provocado que cada vez haya menos trabajadores en el sector privado para sostener a cada uno en el público.

Por otro lado, también es crucial impulsar un ambicioso paquete de reformas con el objetivo de impulsar la economía. Funcas, por ejemplo, reclama que una agenda centrada en la educación, el mercado laboral, el sistema de pensiones y la transición tecnológica y energética y señala que estas reformas pueden contribuir a impulsar el PIB en 2,4 puntos adicionales a lo largo de los próximos años. Y eso es crucial para dos de los grandes problemas a los que se enfrenta la economía española en la próxima década: el desempleo y la deuda. Por un lado, la tasa de paro podría superar el 20% a finales de este año o principios del próximo y no caer por debajo de las cifras de 2019 hasta 2025. Sin embargo, las reformas podrían acelerar la creación de empleo en dos años. Por otro lado, la deuda pública no tocaría techo hasta al menos 2027 en un escenario sin reformas, alcanzando el 132,9% del PIB ese año, pero tomar ciertas medidas ayudaría a que el endeudamiento empezara a moderarse antes, llegando al 124% del PIB ese año.

Un cambio radical en el sistema de pensiones

Una de las áreas donde la necesidad de hacer reformas es más importante es en la de las pensiones. Y no sólo porque el déficit vaya a superar este año el 2% del PIB, quedando incluso en el entorno del 1,5% en los próximos ejercicios, sino porque antes de que la economía alcance los niveles previos a la crisis, quizá en 2024 según las últimas previsiones del Banco de España, el sistema se enfrentará a una bomba de relojería que lleva décadas

Una bajada de impuestos podría ayudar a relanzar la inversión y la contratación

Las pensiones deben tender a un mayor equilibrio entre lo cotizado y lo que se recibe

anunciándose: la jubilación de los *baby boomers* y el envejecimiento demográfico de la población. Entre 2023 y 2043, la población mayor de 65 años se incrementará en 6 millones de personas, mientras que aquellos entre 20 y 65 años disminuirán en 2,3 millones de personas. Y la situación de partida es alarmante, ya que cada pensionista recibe un 72% más que lo cotizado a lo largo de toda su vida laboral, por lo que el equilibrio en el largo plazo no se va a arreglar únicamente con la inmigración y la creación de empleo. Y de no hacer nada, el gasto en pensiones se podría disparar en cerca de tres puntos porcentuales del PIB, comiéndose parte del margen para gastos productivos.

Todo ello urge a plantear una solución que alivie las cuentas del sistema de pensiones en un futuro próximo sin incrementar la carga fiscal del empleo, ya que eso derivaría en un mayor frenazo del mercado laboral, algo del todo inconveniente en este momento. Es necesario ir poniendo los cimientos de un sistema de cuentas nocionales en el que cada pensionista reciba una cuantía muy similar a lo aportado, conforme a la esperanza de vida en el momento de la jubilación, lo que además sería un incentivo muy poderoso a la hora de aflorar la economía sumergida. Aunque prácticamente todos los pensionistas reciben más de lo aportado, este rendimiento es decreciente conforme pasan los años cotizados, llegando no compensar extender voluntariamente la edad de jubilación. Además, aunque el ahorro no sea in-

mediato, el efecto para la sostenibilidad de las cuentas públicas puede ser muy importante debido al enorme ahorro acumulado que puede generar en unas décadas. Dicho de otra forma, una reforma de calado permite gastar más ahora, cuando el Presupuesto puede ser más necesario para impulsar la actividad, al tiempo que se mantiene la senda de déficit bajo un relativo control en el largo plazo.

Crear empleo para la economía del futuro

Además, muy ligado al problema de las pensiones está el del empleo, dado que para pagar la creciente nómina de las pensiones hará falta crear cerca de nueve millones de puestos de trabajo en las próximas décadas, ya que según los expertos es necesario mantener una ratio de 2,1 trabajadores por cada jubilado para que el sistema sea sostenible. Es decir, una media de 300.000 puestos de trabajo cada año. Y el gran problema es que incluso descontando el ejercicio actual, en los 20 años anteriores, España apenas ha creado cerca de 50.000 puestos de trabajo cada ejercicio, en promedio. Para cambiar esta apatía es necesario un cambio en varias líneas de actuación: el coste laboral (que se puede reducir mediante un descenso de las cotizaciones a la Seguridad Social), la retirada de las trabas a las empresas que crean empleo (por ejemplo, minimizando los nuevos requisitos legales cuando se aumenta el número de trabajadores, difiriéndolos algún tiempo o espaciándolos entre más tramos de plantilla, para evitar las retenciones a contratar en segmentos muy concretos) o la mejora de la formación. En este último punto, es necesario ampliar la Formación Profesional con un mayor número de grados, adecuados a las necesidades de las empresas presentes y futuras, algo que también debería hacer la universidad.